

RE: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA | LUIS ARTURO CASTAÑO ARÁNGO | RAD. 2020-00064 | CEQP

Juzgado 01 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Guadalajara De Buga <j01ccbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 22/07/2021 2:29 PM

Para: notificaciones@gha.com.co <notificaciones@gha.com.co>

Se acusa de recibido. De otro lado se advierte que el archivo denominado INFORME TOXICO, no tiene contenido.

Atentamente,

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO

Calle 7 No. 13-56 – Piso 3 - Oficina 306

Celular: 322 5373431

Teléfono (092) 2368454

Email: j01ccbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co

Guadalajara de Buga - Valle del Cauca

Notificaciones por Estado, Traslados y Avisos a la Comunidad, dando click en el siguiente enlace: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-01-civil-circuito-de-buga>

PRUEBA ELECTRÓNICA

Por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega al usuario o peticionario (Artículo 291 en concordancia con el Artículo 612 del C.G. del P. y el Artículo 199 de la Ley 1437 de 2011)

IMPORTANTE

Tenga en cuenta que el horario de **RECEPCIÓN Y ATENCIÓN VIRTUAL** en este buzón electrónico es de Lunes a Viernes de **7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.**, cualquier documento recibido posterior a esta última hora, será radicado con fecha del día hábil siguiente.

De: GHA NOTIFICACIONES ABOGADOS <notificaciones@gha.com.co>

Enviado: jueves, 22 de julio de 2021 2:26 p. m.

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Guadalajara De Buga <j01ccbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co>; uscderecho <uscderecho@gmail.com>; lea_3001@hotmail.com <lea_3001@hotmail.com>; Contactenos ginebra-valle <contactenos@ginebra-valle.gov.co>; claudia.patricia.777@hotmail.com <claudia.patricia.777@hotmail.com>

Cc: GHA JUAN JOSÉ CAMUÉS LÓPEZ <jcamues@gha.com.co>; GHA Carlos Eduardo Quintero Portilla <cquintero@gha.com.co>; jhernandez <jhernandez@gha.com.co>

Asunto: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA | LUIS ARTURO CASTAÑO ARÁNGO | RAD. 2020-00064 | CEQP

Señores

JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUGA (VALLE DEL CAUCA)

E.

S.

D.

REFERENCIA: VERBAL RCE

DEMANDANTES: LUIS ARTURO CASTAÑO ARANGO Y OTRA

DEMANDADOS: TRANSPORTE GINEBRA S.A Y OTROS

RADICADO: 761113103001**20200006400**

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.395.114 de Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional número 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en este proceso como apoderado general de **SBS SEGUROS**

COLOMBIA S.A., a través de los documentos anexos a este correo, procedo a contestar la demanda presentada por los señores LUIS ARTURO CASTAÑO ARÁNGO y ANA DELIA OBANDO BERMÚDEZ en contra de SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., JORGE ALBERTO VÉLEZ ZAPATA y TRANSPORTE GINEBRA S.A. Y, acto seguido, procederé a pronunciarme respecto del llamamiento en garantía formulado por los últimos dos codemandados.

Señores

JUZGADO 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE BUGA (VALLE DEL CAUCA)

E.

S.

D.

REFERENCIA: VERBAL RCE

DEMANDANTES: LUIS ARTURO CASTAÑO ARÁNGO Y OTRA

DEMANDADOS: TRANSPORTE GINEBRA S.A Y OTROS

RADICADO: 76111310300120200006400

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.395.114 de Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional número 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en este proceso como apoderado general de **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**, a través del presente escrito, procedo a contestar la demanda presentada por los señores LUIS ARTURO CASTAÑO ARÁNGO y ANA DELIA OBANDO BERMÚDEZ en contra de SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., JORGE ALBERTO VÉLEZ ZAPATA y TRANSPORTE GINEBRA S.A. Y, acto seguido, procederé a pronunciarme respecto del llamamiento en garantía formulado por los últimos dos codemandados, anticipando desde ya que me opongo tanto a las pretensiones de la demanda como a las del llamamiento en garantía, lo anterior, en virtud de las siguientes consideraciones:

I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA.

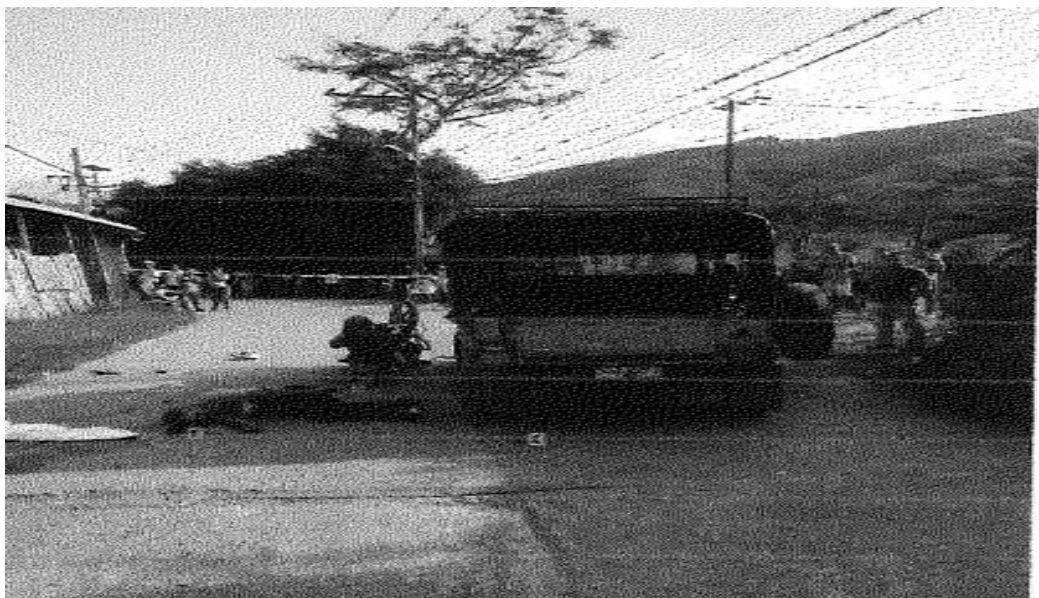
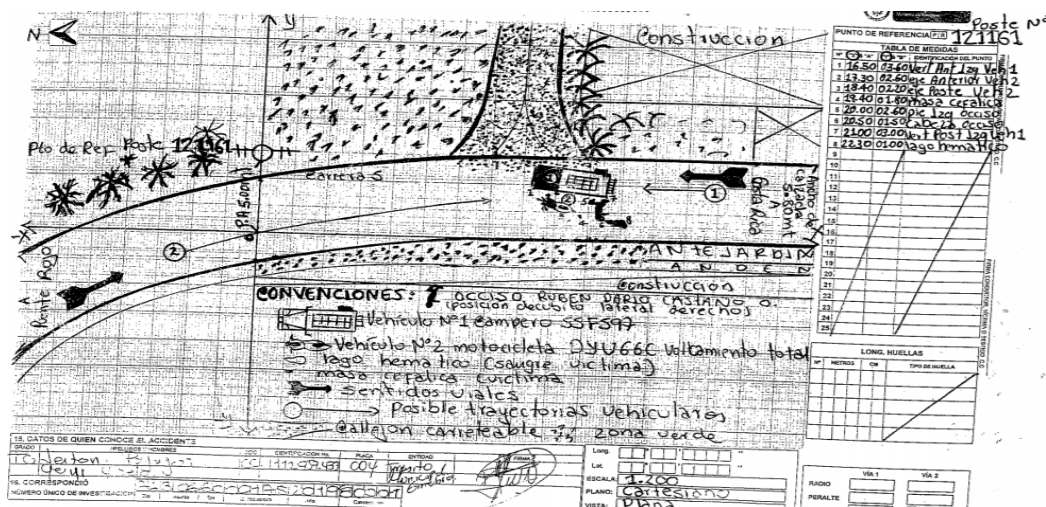
FRENTE AL HECHO No. 1: Teniendo en cuenta que este hecho trae consigo varias afirmaciones, me pronunciaré respecto a cada una de ellas de la siguiente manera:

- A mi representada no le consta, que el día 3 de febrero del 2.019 el señor **JORGE ALBERTO VELEZ ZAPATA** hubiere atropellado al señor RUBEN DARIO CASTAÑO OBANDO, mucho menos le consta que el primero de ellos le hubiese ocasionado la muerte al segundo, lo anterior, debido a que no fue testigo presencial de los hechos, y tales circunstancias son completamente ajenas a lo que pudiese conocer.

Pese a lo anterior, aunque mi representada no se encontraba en el lugar de los hechos, dentro del plenario obran sendas pruebas documentales aportadas por el mismo accionante, tales como el informe policial de accidente de tránsito, en donde se da cuenta que el accidente sí ocurrió y que la muerte del señor RUBEN DARIO CASTAÑO OBANDO ocurre por su propia culpa, lo anterior, por cuanto en la hipótesis del accidente se relaciona que el vehículo 2 (motocicleta de placas DYV-66C) fue quien perdió el control e invadió el carril contrario, tal como se ilustra a continuación:

10. TOTAL VICTIMAS	PEATON	CHALECO	NO	GRAVEDAD	MUERTO	HERIDO
11. HIPOTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO	ACOMPANANTE	PASAJERO	CONDUCTOR	TOTAL HERIDOS	MUERTOS	
DEL CONDUCTOR		DEL VEHICULO DE LA VÍA		DEL PEATON DEL PASAJERO		
OTRA [11513]	ESPECIFICAR, CUAL?	Perdida de control del vehículo invadiendo el carril (Vh.2).				
12. TESTIGOS						
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.				
APELLIDOS Y NOMBRES						

Del mismo modo, en el croquis levantado por la autoridad de tránsito y en las fotografías tomadas en el lugar de los hechos, se puede ver claramente que fue el conductor de la motocicleta de placas DYV-66C quien en una semicurva invade el carril contrario y produce el lamentable accidente de tránsito:



Esta última situación, se contrasta aún más, al encontrarse que el señor RUBEN DARIO CASTAÑO OBANDO se encontraba en grado 3 de alicoramiento, el cual es el más alto de acuerdo con la Resolución No. 000414 del 27 de agosto de 2002 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y por ende, el que más afecta al momento de conducir un vehículo:

RESULTADO	VALOR	UNIDAD
Identificación de etanol en fluidos biológicos	No se detectó etanol	ND
Concentración de isopropanol	No detectado	mg/100ml
Concentración de metanol	No detectado	mg/100ml
Determinación de etanol	Se detectó etanol	ND
Determinación de metano	No se detectó metanol	ND
Identificación de acetona en fluidos biológicos	No se detectó acetona	ND
Identificación de acetaldehído	No solicitado	ND
Concentración de etanol	208	mg/100ml
Identificación de metanol en fluidos biológicos	No se detectó metanol	ND
Concentración de acetona	No detectado	mg/100ml
Identificación de isopropanol en fluidos biológico	No se detectó isopropanol	ND

- A mi representada no le consta que para el 3 de febrero del 2.019 el vehículo de placas SSF-597 estuviese afiliado a la empresa TRANSPORTE GINEBRA S.A. sigla TRANSGINEBRA S.A, así las cosas, será el demandante quien deberá acreditar tal afirmación a través de los medios probatorios pertinentes, conducentes y útiles.

FRENTE AL HECHO No. 2: Este hecho se niega categóricamente por cuanto el señor JORGE ALBERTO VELEZ ZAPATA no es civilmente responsable por la muerte del señor RUBEN DARIO CASTAÑO OBANDO, así como tampoco lo es, de manera solidaria la empresa TRANSPORTE GINEBRA S.A, y consecuentemente tampoco podría serlo SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Además, no es cierto que JORGE ALBERTO VELEZ ZAPATA hubiese violado alguna norma de tránsito cuando es claro que, el accidente de tránsito que deviene en la muerte del hijo de los accionantes se da por su culpa exclusiva, pues fue él quien al estar en un alto grado de alicoramiento invade el carril contrario e impacta el rodante de placas SSF-597.

Al respecto, debe decirse que no existe ningún soporte probatorio que permita si quiera inferir que el señor JORGE ALBERTO VELEZ ZAPATA hubiese violado alguna norma de tránsito, máxime cuando el mismo informe policial de accidente de tránsito determina que fue la motocicleta de placas DYV-66C la que invadió el carril contrario y colisionó con el vehículo de placas SSF-597.

FRENTE AL HECHO No. 3: Este hecho se admite pues se visualiza poder otorgado por los señores LUIS ARTURO CASTAÑO ARANGO y ANADELIA OBANDO BERMUDEZ a favor del Dr. JUAN CARLOS VICTOR MANUEL BEJARANO RINCON.

FRENTE AL HECHO No. 4: Teniendo en cuenta que este hecho trae consigo tres afirmaciones, me pronunciaré sobre cada una de la siguiente manera:

- A mi representada no le consta que el vehículo de placas SSF-597 sea actualmente de propiedad de JORGE ALBERTO VELEZ ZAPATA, lo anterior, por cuanto el certificado de tradición, aportado como anexo de la demanda fue expedido el 28 de octubre de 2019, situación que pudo variar en el transcurso

del tiempo hasta la fecha.

- Sin que implique responsabilidad alguna de parte de mi representada, se indica que es cierto que el vehículo de placas SSF-597 contaba con póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 1000306, cuya vigencia era:

FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FIN VIGENCIA
14 de diciembre de 2018	14 de diciembre de 2019

Las condiciones particulares de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 1000306 son las siguientes:

TOMADOR: TRANSPORTES GINEBRA SA
ASEGURADO: MESA SANCHEZ MAURICIO
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	60 SMMLV	20%, MÍNIMO 5 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	60 SMMLV	20%, MÍNIMO 5 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	120 SMMLV	20%, MÍNIMO 5 SMMLV

Igualmente, dentro del condicionado particular de la póliza RCE No. 1000306, se tiene que:

“El deducible establecido para el amparo de R.C.E y/o R.C.C. en la carátula de la póliza se mantendrá siempre y cuando el accidente de tránsito sea reportado dentro de los 30 días calendarios siguientes a la ocurrencia del mismo el conocimiento por parte del asegurado o tomador del evento que genera dicha responsabilidad. En caso de presentar a SBS Colombia el siniestro fuera de los términos establecidos, el deducible se modificará de acuerdo a los días transcurridos después del día 30 así:

Hasta 60 días calendarios deducible 20% mínimo 6 SMMLV

Hasta 90 días calendarios deducible 30% mínimo 10 SMMLV

Más de 90 días calendarios deducible 50% mínimo 20 SMMLV”

Cabe destacar que la empresa TRANSPORTES GINEBRA S.A realizó el aviso de siniestro a mi representada el 08 de marzo de 2019, es decir por fuera de los 30 días siguientes a la ocurrencia del supuesto accidente, que se dice acaeció el 03 de febrero de 2019, por lo cual los deducibles aplicables por cada amparo son:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	60 SMMLV	20%, MÍNIMO 6 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	60 SMMLV	20%, MÍNIMO 6 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	120 SMMLV	20%, MÍNIMO 6 SMMLV

Por otro lado, el condicionado general de la póliza se encuentra en el CLAUSULADO 20122017-1322-P-06-RCE_TRANSPASAJER-D00I, que se aporta en la presente.

No obstante a lo anteriormente referido, debe de tenerse en cuenta que el hecho de que exista una póliza de RCE no se traduce en responsabilidad automática de parte de mi representada **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A**, ni constituye per se obligación indemnizatoria alguna, pues ello está supeditado a que se cumplan los siguientes presupuestos **i)** la existencia de responsabilidad civil extracontractual en cabeza del asegurado, **ii)** que los hechos ocurrieran dentro de la vigencia y **iii)** que no exista causal legal o contractual para la inoperancia del seguro, cuestiones ultimas que ni se han probado ni se podrán probar al interior del presente proceso, pues es claro que no existe responsabilidad alguna a cargo de la parte demandada, pues se encuentra acreditada la culpa de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad por rompimiento del nexo causal.

- No es cierto que SBS SEGUROS COLOMBIA S.A se encuentre representada por CRISTIAN ALBERTO DEL RIO, de dicha situación puede dar cuenta el certificado de existencia y representación aportado por mi prohijada con la contestación de la demanda inicial.

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por cuanto carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, en la medida en que no se reúnen los supuestos esenciales para que se estructure la Responsabilidad Civil Extracontractual que pretende endilgarse a los demandados.

En el caso concreto, advertimos que la parte actora no demuestra responsabilidad alguna en cabeza del señor JORGE ALBERTO VELEZ ZAPATA, cuestión que inequívocamente debe llevar a que se absuelva a la parte pasiva de esta acción, y en consecuencia, también se deberá absolver a mi representada.

En ese sentido, me pronuncio de manera separada sobre las pretensiones de la demanda de la siguiente forma:

FRENTE A LA PRETENSIÓN No. 1. Me opongo rotunda y enfáticamente a esta pretensión declarativa, toda vez que es infundada, por no configurarse los supuestos esenciales para que pueda predicarse que surgió una responsabilidad en cabeza de los demandados.

Al respecto, es importante reseñar que no existe nexo causal alguno entre la conducta desplegada por el señor JORGE ALBERTO VELEZ ZAPATA y la muerte de RUBEN DARIO CASTAÑO OBANDO, lo anterior, debido a que se encuentra acreditada la culpa de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad, lo anterior, debido a que fue el señor RUBEN DARIO CASTAÑO OBANDO, quien pese a estar en un alto grado de alicoramiento, decide conducir su motocicleta e invade el carril contrario impactando al rodante de placas SSF-597 y produciendo su propia muerte.

FRENTE A LA PRETENSIÓN No. 2. Señor juez, me opongo tajantemente a esta pretensión pues para el presente caso, no hay lugar al pago de indemnización alguna en cabeza de los accionados, lo anterior, debido a que la muerte de RUBEN DARIO CASTAÑO OBANDO se da por su culpa exclusiva, haciéndose de esta manera imposible endilgarle responsabilidad alguna a la parte pasiva de la presente acción.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que esta suma además de ser exorbitante, no encuentra fundamento alguno para su reconocimiento, pues para el presente caso no basta alegar el supuesto detrimento sino que es menester acreditar debidamente su producción y cuantificación, toda vez que al funcionario juzgador le está vedado presumir un perjuicio y se tiene que concretar a lo que ciertamente está acreditado en el expediente, de manera que lo que no aparezca allí simplemente no existe y por ende no puede ser considerado por el Juez

La Corte Suprema de Justicia ha concebido el lucro cesante como:

“El daño emergente abarca la pérdida misma de elementos patrimoniales, los desembolsos que hayan sido menester o que en el futuro sean necesarios y el advenimiento del pasivo, causados por los hechos de los cuales trata de deducirse la responsabilidad; en tanto que **el lucro cesante**, cual lo indica la expresión, **está constituido por todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirían luego, con el mismo fundamento de hecho**’, como ha sido el criterio de esta Corporación (Sent. del 29 de septiembre de 1978)” (CSJ, SC del 28 de junio de 2000, Rad. n.º 5348).

Así las cosas, no puede reconocerse rubro alguno, pues además de encontrarse acreditada la culpa de la víctima, no se encuentra acreditado que el señor RUBEN DARIO CASTAÑO OBANDO percibiera algún salario y que de este destinara algún monto mensual para sus padres, cuestión que no es objeto de presunción, máxime cuando, se encuentra acreditado que este era mayor de 25 años y ya tenía un nuevo núcleo familiar.

Al respecto, el Honorable Consejo de Estado ha establecido:

“En los términos solicitados en la demanda, y como quiera que se trata de la muerte de un soldado conscripto, la Sala decretará a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las sumas que Marín Gil ha debido percibir durante el período comprendido entre la fecha en que terminaría la prestación del servicio militar obligatorio y **el momento en que cumpliría 25 años de edad, como quiera que se entiende, conforme a las reglas de la experiencia, que un hijo ayuda a sus padres hasta que cumple la mencionada edad, oportunidad en la cual se presume inicia una vida independiente**”¹

Del mismo modo, dicha corte en sentencia posterior, vario su postura respecto de la presunción anterior e indicó:

“Lo anterior significa que **desde el punto normativo tampoco existen razones para presumir que los hijos entre los 18 y los 25 años contribuyen con el sostenimiento económico de sus padres, cuando la exigibilidad de esta obligación no surge por la simple relación de parentesco, sino que demanda la configuración de dos situaciones de hecho: por un lado que el peticionario carezca de bienes y, por tanto, requiera los alimentos que solicita y, por el otro, que la persona a quien se le piden los alimentos tenga los medios económicos para procurarlos.**

Con fundamento en lo expuesto, la Sala unificará su jurisprudencia para señalar que, en ausencia de prueba que demuestre **(i) que los hijos contribuyen económicamente con el sostenimiento del hogar paterno o materno, porque materialmente están en condiciones de hacerlo, es decir, porque ejercen una actividad productiva que les reporta algún ingreso, y (ii) que los padres son beneficiarios de la obligación alimentaria porque no tienen los medios para procurarse su propia subsistencia, bien porque están desempleados, enfermos o sufren de alguna discapacidad, no puede presumirse que la muerte de una persona menor de 25 años genera una pérdida de ingresos cierta a favor de sus padre**”² (negrita propia)

FRENTE A LA PRETENSIÓN No. 3. Señor juez, me opongo tajantemente a esta pretensión pues para el presente caso, no hay lugar al pago de indemnización alguna en cabeza de los accionados, lo anterior, debido a que la muerte de RUBEN DARIO CASTAÑO OBANDO se da por su culpa exclusiva, haciéndose de esta manera imposible endilgarle responsabilidad alguna a la parte pasiva de la presente acción.

Al respecto, se debe tener en cuenta que el perjuicio moral no opera de manera automática, ante la ocurrencia de un hecho dañoso, ni se presume en todos los casos; de allí a que corresponda al juez, dentro de un análisis minucioso, objetivo y detallado

¹ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de octubre 15 de 2008, rad 18586 C.P. Enrique Gil Botero.

² Conforme al criterio empleado por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en varias providencias: sentencias de 8 de junio de 2017, exp. 50352; de 11 de junio de 2015, exp. 33355; de 13 de noviembre de 2014, exp. 30753; y de 5 de abril de 2013, exp. 27281, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

de la situación, concluir si se acreditó o no la existencia de tal perjuicio, y acto seguido, de encontrarlo probado, le corresponderá determinar su cuantía, atendiendo lógicamente a criterios razonables y proporcionales que no generen un enriquecimiento injustificado a favor de los demandantes, en un franco desmedro de la contraparte.

Descendiendo al caso en concreto, vemos como el apoderado de los accionantes solicita la suma de 450 S.M.M.L.V por concepto de perjuicios morales, no obstante, esta pretensión resulta completamente impróspera, pues no se acredita ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de dicho rubro. Adicionalmente, para que se reconozca esta pretensión es requisito “sine qua non” que se haya acreditado fehacientemente todos y cada uno de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, cuestión que, en el caso de marras, no se encuentra acreditada ni podrá declararse al encontrarse plenamente acreditada el hecho de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que respecto a mi prohijada no existe responsabilidad solidaria alguna con los demás codemandados, pues esta solo surge de la Ley o del Contrato y en ninguna de ellas se previó de tal forma.

FRENTE A LA PRETENSIÓN No. 4. Señor juez, me opongo tajantemente a esta pretensión por cuanto el numeral 1 del artículo 365 del CGP dispone que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, y como quedará acreditado la parte accionada resultará victoriosa dentro del presente pues no se declarará responsabilidad alguna por la muerte de RUBEN DARIO CASTAÑO OBANDO, la cual fue causada por su culpa exclusiva.

III. OBJECCIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO

Señor juez, se objeta el juramento estimatorio realizado por la parte actora, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

- 1. Son errados los supuestos y los datos relacionados por los demandantes para justificar el perjuicio material de lucro cesante futuro, por las razones que se exponen a continuación:**

De forma reiterada, la jurisprudencia de las altas cortes, ha indicado que se presume que los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco años, en consideración *“al hecho social de que a esa edad es normal que los colombianos hayan formado su propio hogar, realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas en otros frentes familiares”*³; y en el caso particular, al momento de la ocurrencia del hecho que dio origen al presente litigio, el señor RUBÉN DARÍO CASTAÑO, tenía 36 años de edad. Aunado a lo anterior, no existe prueba en el expediente, que acredite que los padres del fallecido recibían ayuda económica de su hijo antes del fallecimiento de éste,

³ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 26 de noviembre de 2014. Radicado: 19001-23-31-000-2000-03226-01(26855) (CP Hernán Andrade Rincón). Esta posición ha sido asumida por el Consejo de Estado, entre otras, en las sentencias del 22 de octubre de 2012. Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado. Radicado: 52001-23-31-000-1997-08790-01(24776) (CP Olga Mérida Valle de la Hoz) y sentencia del 22 de abril de 2015. Sección Tercera del Consejo de Estado. Radicado: 5-001-23-31-000-2000-03838-01 (19.146) (CP Stella Conto Díaz del Castillo).

o que aquellos estuvieran en circunstancias que extendieran dicha obligación o ayuda más allá de los 25 años de edad de aquel.

Al respecto, el Honorable Consejo de Estado ha establecido:

“En los términos solicitados en la demanda, y como quiera que se trata de la muerte de un soldado conscripto, la Sala decretará a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las sumas que Marín Gil ha debido percibir durante el período comprendido entre la fecha en que terminaría la prestación del servicio militar obligatorio y **el momento en que cumpliría 25 años de edad, como quiera que se entiende, conforme a las reglas de la experiencia, que un hijo ayuda a sus padres hasta que cumple la mencionada edad, oportunidad en la cual se presume inicia una vida independiente**”⁴

Del mismo modo, dicha corte en sentencia posterior, vario su postura respecto de la presunción anterior e indicó:

“Lo anterior significa que **desde el punto normativo tampoco existen razones para presumir que los hijos entre los 18 y los 25 años contribuyen con el sostenimiento económico de sus padres, cuando la exigibilidad de esta obligación no surge por la simple relación de parentesco, sino que demanda la configuración de dos situaciones de hecho: por un lado que el peticionario carezca de bienes y, por tanto, requiera los alimentos que solicita y, por el otro, que la persona a quien se le piden los alimentos tenga los medios económicos para procurarlos.**

Con fundamento en lo expuesto, la Sala unificará su jurisprudencia para señalar que, en ausencia de prueba que demuestre **(i) que los hijos contribuyen económicamente con el sostenimiento del hogar paterno o materno, porque materialmente están en condiciones de hacerlo, es decir, porque ejercen una actividad productiva que les reporta algún ingreso, y (ii) que los padres son beneficiarios de la obligación alimentaria porque no tienen los medios para procurarse su propia subsistencia, bien porque están desempleados, enfermos o sufren de alguna discapacidad, no puede presumirse que la muerte de una persona menor de 25 años genera una pérdida de ingresos cierta a favor de sus padre**”⁵ (negrita propia)

Sin perjuicio de lo enunciado, esto es, que en el caso particular, definitivamente no procedería el reconocimiento del lucro cesante pretendido, se aclara que la edad de RUBEN DARIO CASTAÑO, para la fecha de su muerte, no corresponde a 37 años,

⁴Nota original de la sentencia en cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de octubre 15 de 2008, rad 18586 C.P. Enrique Gil Botero.

⁵ Conforme al criterio empleado por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en varias providencias: sentencias de 8 de junio de 2017, exp. 50352; de 11 de junio de 2015, exp. 33355; de 13 de noviembre de 2014, exp. 30753; y de 5 de abril de 2013, exp. 27281, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

como lo afirma la parte actora. Igualmente, su expectativa de vida, y el medio a través del cual la obtuvieron (periódico el País), no es la acertada.

Conforme al registro civil de nacimiento y de defunción, aportados por los accionantes, que serán objeto de ratificación, el señor RUBEN DARIO CASTAÑO, presuntamente, nació el 30 de OCTUBRE de 1982 y falleció el 03 de FEBRERO de 2019, por lo cual tendría 36 años al momento de su deceso.

FECHA DE NACIMIENTO: 30 DE OCTUBRE DE 1982

FECHA DE MUERTE: 03 DE FEBRERO DE 2019

EDAD: 36 años

Por otro lado, la expectativa de vida no se toma a partir de las publicaciones que realizan los periódicos que circulan en el territorio nacional, sino que, para el caso que nos ocupa, ese dato se obtiene a través de lo que certifica la superintendencia financiera conforme lo estipula el artículo 45 del Decreto 656 de 1994 y el numeral 9 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010. Para dicho efecto, se debe tener en cuenta la RESOLUCIÓN NÚMERO 1555 DE 2010 “*Por la cual se actualizan las Tablas de Mortalidad de Rentistas Hombres y Mujeres*”, que nos dice que, para los hombres con 36 años, su expectativa de vida es de 44,6 años.

VIDA PROBABLE: 44,6 años

VIDA PROBABLE EN MESES: 535 MESES

Teniendo en cuenta lo expuesto, el cálculo realizado por la parte actora es desacertado, y en todo caso, ésta no discrimina puntualmente el método a través del cual lo estima,

Por lo expuesto, resulta claro que la parte actora incumple lo preceptuado por el Artículo 206 del CGP:

Artículo 206. Juramento estimatorio. *Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación. (Aparte Subrayado y en Negrita)*

Adicionalmente, se resalta que la parte actora no relaciona el salario que tuvo en cuenta para calcular el lucro cesante futuro, pues solamente dice que: “*se debe tomar el salario mínimo como base*”, sin especificar la anualidad correspondiente. Tampoco aporta el periódico el país de abril 18 de 2010, a través del cual calcula la vida probable de Rubén Darío ni da cuenta de por qué lo hace a través de este medio en lugar de lo que las entidades gubernamentales certifican, y mucho menos indica la operación utilizada para que el resultado que él obtiene corresponda a \$292.056.000 pesos.

Recordemos lo dicho por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C- 279, 2013.

“JURAMENTO ESTIMATORIO-Exigencias y trámite de objeción garantizan el debido proceso y el derecho de defensa. El Código General del Proceso exige un juramento estimatorio en aquellos eventos en los que se pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, constituyéndose el juramento estimatorio además de un medio de prueba en un requisito de admisibilidad de la demanda, situación que en modo alguno restringe el derecho a la administración de justicia, habida cuenta que su finalidad es la de permitir agilizar la justicia y disuadir la interposición de demandas temerarias y fabulosas, propósitos que claramente se orientan a los fines de la administración de justicia. Además, en la medida que la norma establece un procedimiento para la aplicación y contradicción del juramento estimatorio se garantiza el derecho de defensa y el debido proceso, además de permitirle al juez ordenar pruebas de oficio si advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospecha que haya fraude, colusión o cualquier situación similar, y deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido.”

Igualmente, la doctrina se ha pronunciado al respecto:

El artículo 206 del Código General del Proceso determina que, cuando un demandante pretenda el pago de una suma de dinero por conceptos tales como una indemnización, o una compensación, entre otras, tiene la carga procesal de estimar, de forma razonada y bajo la gravedad del juramento, el valor de la pretensión que reclama, discriminando cada uno de sus componentes, para que de esa forma, dicha estimación sea prueba de la cuantía de la pretensión hasta tanto no sea objetada por el extremo pasivo de la relación jurídico procesal⁶

2. El demandante pide que se tengan en cuenta las pretensiones indemnizatorias plasmadas por perjuicios morales por cuanto considera que el perjuicio moral debe reconocerse a favor de los padres de RUBEN DARIO CASTAÑO, aduciendo que:

“2. Perjuicios morales:

2.1 Objetivados:

a) Se debe fijar a consecuencia y por el hecho del demandado, que se desprendían, indudablemente, de ese accidente, que coloco a mi poderdante en una posición desventajosa y de desigualdad, una indemnización moral que estimo en \$450 salarios mínimos en común y proindiviso para los familiares de RUBEN DARIO CASTAÑO OBANDO de 37 años.”

Relatado lo anterior, se objeta este aparte del juramento estimatorio por cuanto es improcedente, desde el punto de vista legal que se incluya dentro del juramento estimatorio los perjuicios morales o cualquier otro de carácter extrapatrimonial cuando el artículo 206 del C.G.P, es totalmente claro al señalar que: **“El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales.** Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz.”, es por ello que no se puede efectuar juramento estimatorio bajo dichos tópicos, por lo cual deberá ser excluido y rechazado por el despacho.

⁶ ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. Lecciones de Derecho Procesal, Ed. ESAJU, T.4, Bogotá, 2016.

IV. EXCEPCIONES DE MÉRITO.

1. CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES PELIGROSAS

Sin implique aceptación de responsabilidad, formulo la presente excepción en los siguientes términos:

La regulación legal de las actividades peligrosas en Colombia se encuentra contemplada en el artículo 2356 Código Civil, que establece: *“Por regla general todo daño imputado a la malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por esta”* (...). Desde este marco normativo la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado teorías para determinar la responsabilidad.

En derecho colombiano, el concepto de actividad peligrosa se ha construido lentamente con base en dos definiciones importantes: las definiciones de peligrosidad y la valoración del riesgo.

➤ La definición de peligrosidad:

La Corte Suprema de Justicia⁷ expone que *“debe entenderse por actividad peligrosa la que, aunque lícita, es de las que implican riesgos de tal naturaleza que hacen inminente la ocurrencia de daños, por ser una actividad multiplicadora de energía, debido a la manipulación de ciertas cosas o al ejercicio de una conducta específica que lleva implícito el riesgo de producir una lesión o menoscabo, porque tiene la aptitud de provocar un desequilibrio o alteración en las fuerzas que de ordinario despliega una persona respecto de otra, dados los instrumentos empleados y sus inciertos efectos”*

Es decir que, las actividades peligrosas debido a su alto riesgo son una amenaza a la vida en general.

➤ La valoración del riesgo:

La Corte Suprema de Justicia, al referirse a las actividades peligrosas, en ocasiones trata los términos riesgo y peligro como sinónimos. Afirma que la actividad peligrosa *“se debe tratar como un régimen conceptual y probatorio cuya misión no es otra que la de favorecer a las víctimas de ciertos accidentes en que el hombre, utilizando en sus propias labores, fuerzas de las que no puede tener siempre absoluto control, y que por lo tanto son aptas para romper el equilibrio antes existente, de hecho, ha colocado a los demás asociados bajo el riesgo inminente de recibir lesión”*⁸

Ahora bien, dentro de las actividades que hasta ahora son consideradas tradicionalmente peligrosas son la conducción de vehículos terrestres y aeronaves.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que para el presente caso, que así como el

⁷ Corte Suprema de Justicia, Sala Civil (2002). Sentencia del 30 de septiembre de 2002, Exp. 7069. [M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo]

⁸ Corte Suprema de Justicia, Sala Civil (2002). Sentencia del 30 de septiembre de 2002, Exp. 7069. [M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo]

vehículo de placas SSF-597 era conducido por el señor JORGE ALBERTO VELEZ ZAPATA, igualmente, la motocicleta de placas DYV-66C era conducida por el señor RUBEN DARIO CASTAÑO, para la fecha de los hechos, es decir que ambos involucrados se encontraban en el ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la conducción o tránsito en automotor, es decir que, estando ambos en movimiento, estarían mediados bajo la órbita de la presunción de culpas.

En este punto, es menester dilucidar que mediante sentencia del 24 de agosto de 2009 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia reiteró que:

“En la responsabilidad civil por actividades peligrosas concurrentes, es preciso advertir, la imperiosa necesidad de examinar la objetiva incidencia del comportamiento para establecer su influjo definitivo o excluyente, unitario o coligado, en el daño, o sea, la incidencia causal de las conductas y actividades recíprocas en consideración a los riesgos y peligros de cada una, determinando en la secuencia causativa, cuál es la relevante en cuanto determinante del daño y cuál no lo es y, de serlo ambas, precisar su contribución o participación” .

Teniendo en cuenta lo anterior, al presentarse este tipo de concurrencia de actividades peligrosas, se debe tener en cuenta que la culpa se neutraliza, dando paso a la teoría de la neutralización de las presunciones, la cual indica que en caso de enfrentarse dos presunciones de responsabilidad se aplicará la responsabilidad con culpa probada, toda vez que estas presunciones se anulan entre sí, abriendo paso a la necesidad de regresar a la regla general, esto es, al régimen de culpa probada. Es así entonces que, si ninguna parte logra probar la culpa del otro, el Juez se encuentra en el deber de absolver los demandados.

Para el caso en concreto, tenemos que la parte demandante peca evidentemente por pretender que se les indemnice por la muerte de RUBEN DARIO CASTAÑO cuando de las pruebas obrantes en el plenario es claro que la misma se dio por su culpa exclusiva, como a continuación se detallará. Es decir, los accionantes no demuestran la culpa en cabeza del conductor del vehículo de placas SSF-597, sino que, por el contrario, acreditan su ausencia de responsabilidad.

2. CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA

Señor Juez, se formula la presente excepción por cuanto es claro y evidente que el presunto accidente ocurrido entre los vehículos de placas SSF-597 y DYV-66C, en donde fallece el señor RUBEN DARIO CASTAÑO, se da por la culpa exclusiva de este último por haber perdido el control de su motocicleta y haber invadido el carril contrario, impactando finalmente con el rodante conducido por el señor JORGE ALBERTO VELEZ ZAPATA. Así lo refiere el informe policial de accidente de tránsito en la sección de hipótesis, donde se relaciona lo siguiente:

10. TOTAL VICTIMAS		PEATON		ACOMPANANTE		PASAJERO		CONDUCTOR		CHALECO		GRAVEDAD	
										SI		MUERTO	
										NO		HERIDO	
11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO													
DEL CONDUCTO				DEL VEHICULO DE LA VIA				TOTAL HERIDOS				MUERTOS	
OTRA 41573				ESPECIFICAR CUAL? Periclitado de control del vehiculo invadiendo el carril. (Vh. 2).				DEL PEATON				DEL PASAJERO	
12. TESTIGOS													
APELLIDOS Y NOMBRES													
APELLIDOS Y NOMBRES													
DOC													
IDENTIFICACIÓN No.													
DIRECCIÓN													

Claramente el vehículo 2, al que se hace referencia en el acápite de hipótesis, es la motocicleta de placas DYV-66C, conducida por el señor RUBEN DARIO CASTAÑO.

Igualmente, en la página 35 del archivo pdf que contiene los anexos de la demanda, aportada por el demandante, obra documento con encabezado Formato único de noticia criminal, en donde explícitamente se dice:

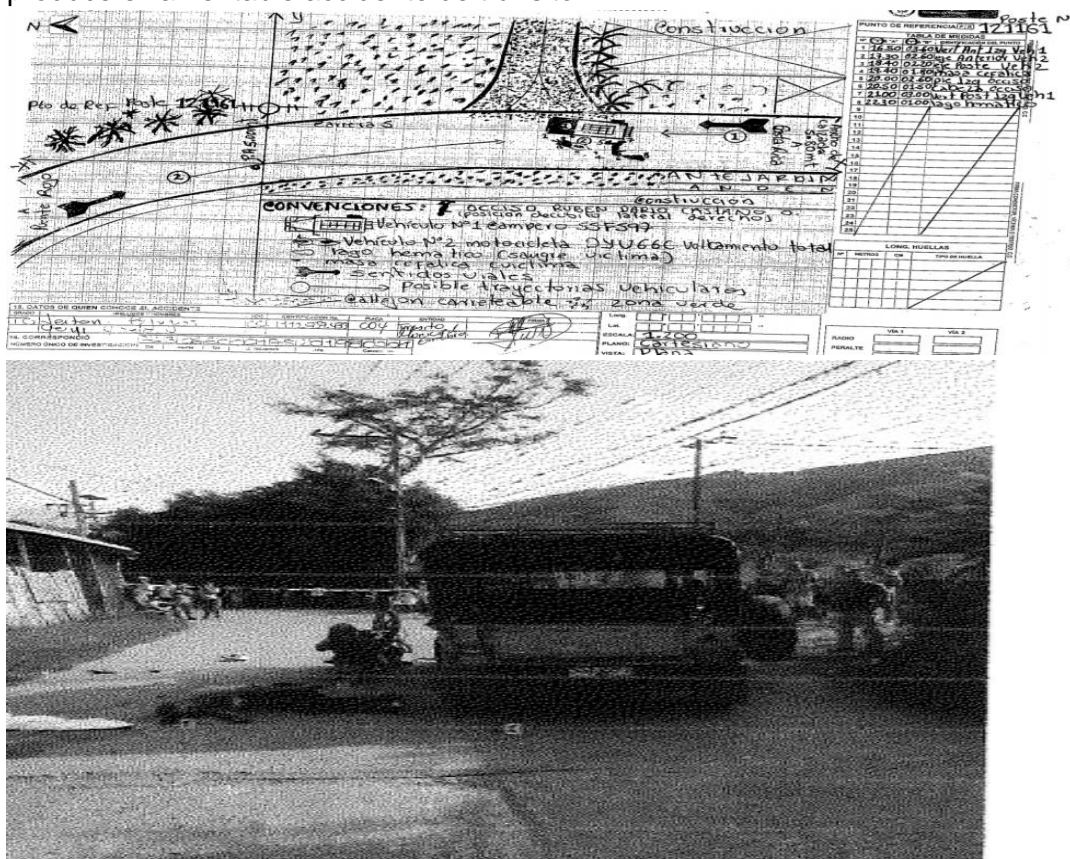
“Como hipótesis preliminar, según lo observado en la escena, el hecho pudo ocasionarse por invasión de carril del vehículo Número 2, es decir la motocicleta.”

NOTA: DE ACUERDO A VERSIONES ESCUCHADAS EN LABORES DE CAMPO REALIZADOS SE HACE REFERENCIA AL SEÑOR MARINO BERNAL EL CUAL VIVE EN LA VEREDA CHAFALOTE, TEL 3103750139 COMO POSIBLE TESTIGO DE LOS HECHOS, PERSONA CON LA QUE ME COMUNIQUE TELEFONICAMENTE QUIEN AFIRMO HABER PRESENCIADO LOS HECHOS, INDICÓ ADEMÁS QUE RESIDE EN LA VEREDA CHAFALOTE, ALTO DE JULIA GRANJA LA BRISAS, ASÍ MISMO INDICÓ QUE PUEDE SER CITADO EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE EN LA CARRERA 14 NO 6-63.

COMO HIPÓTESIS PRELIMINAR, SEGÚN LO OBSERVADO EN LA ESCENA, EL HECHO PUDO OCASIONARSE POR INVASIÓN DE CARRIL DEL VEHICULO NÚMERO 2, ES DECIR LA MOTOCICLETA.

NOTA: POR FAVOR...

Del mismo modo, en el croquis levantado por la autoridad de tránsito y en las fotografías tomadas en el lugar de los hechos, se puede ver claramente que fue el conductor de la motocicleta de placas DYV-66C quien en una semicurva invade el carril contrario y produce el lamentable accidente de tránsito:



Esta última situación, se contrasta aún más, al encontrarse que el señor RUBEN DARIO CASTAÑO OBANDO se encontraba en grado 3 de alicoramiento, el cual es el más alto de acuerdo con la Resolución No. 000414 del 27 de agosto de 2002 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y, por ende, el que más afecta al momento de conducir un vehículo:

RESULTADO	VALOR	UNIDAD
Identificación de etanol en fluidos biológicos	No se detectó etanol	ND
Concentración de isopropanol	No detectado	mg/100ml
Concentración de metanol	No detectado	mg/100ml
Determinación de etanol	Se detectó etanol	ND
Determinación de metano	No se detectó metanol	ND
Identificación de acetona en fluidos biológicos	No se detectó acetona	ND
Identificación de acetaldehído	No solicitado	ND
Concentración de etanol	206	mg/100ml
Identificación de metanol en fluidos biológicos	No se detectó metanol	ND
Concentración de acetona	No detectado	mg/100ml
Identificación de isopropanol en fluidos biológico	No se detectó isopropanol	ND

Recordemos que jurisprudencialmente se tiene establecido que quien directamente o a través de sus agentes le infiera daño a otro, originado por hecho o culpa suya, queda obligado a resarcirlo. A su vez, quien pretenda la indemnización derivada de tal suceso deberá demostrar, en principio, el perjuicio sufrido, el hecho generador del mismo atribuible al demandado y el nexo causal adecuado entre ambos factores; sin éste, el juicio de imputación quedará destinado a sucumbir.

Aunque objetivamente merezca atribuirse un determinado resultado dañoso a una persona, puede ocurrir que su responsabilidad no resulte comprometida y por ende, no sea viable su declaratoria, debido a la presencia de un hecho externo, imprevisto e irresistible, exonerativo de ella.

Tradicionalmente se ha considerado que esas circunstancias eximentes de responsabilidad, son la fuerza mayor, el caso fortuito, y el hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima.

La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SC-5885 de 6 de mayo de 2016, ha sostenido:

*“(...) Cuando el daño se origina en una actividad de las estimadas peligrosas, la jurisprudencia soportada en el artículo 2356 del Código Civil ha adocinado un régimen conceptual y probatorio especial o propio, en el cual la culpa se presume en cabeza del demandado bastándole a la víctima demostrar el hecho intencional o culposo atribuible a éste, el perjuicio padecido y la relación de causalidad entre éste y aquél. **La presunción, bajo ese criterio, no puede ceder sino ante la demostración de una***

conducta resultante de un caso fortuito, fuerza mayor, o de la ocurrencia de un hecho extraño como la culpa exclusiva de la víctima o culpa de un tercero, con el propósito de favorecer a las víctimas de accidentes en donde el hombre utilizando en sus labores fuerzas de las que no siempre puede ejercer control absoluto, son capaces de romper el equilibrio existente, y como secuela colocan a las personas o a los coasociados bajo el riesgo inminente de recibir lesión (...) (se destaca).

En idéntico sentido, el fallo SC-17723 de 7 de diciembre de 2016, afirmó:

*“(...) La teoría de la actividad peligrosa se construyó la doctrina jurisprudencial de esta Corporación, con sustento en el artículo 2356 del Código Civil, la cual comporta como una de sus principales características, **la concerniente a la «presunción de culpa» de quien ejecuta dicha actividad, por lo que para liberarse de responsabilidad en el evento de reclamación con fines indemnizatorios, deberá demostrar que el hecho derivó de una causa extraña, esto es, culpa exclusiva de la víctima, o hecho proveniente de un tercero, o existencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito (...)**”* (se destaca).

Por lo anterior, es imperativo analizar la conducta desplegada por la propia víctima del accidente de tránsito, RUBEN DARIO CASTAÑO, para determinar si su muerte se da como consecuencia de propia culpa. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha referido⁹:

“En ese orden de ideas, se puede señalar que en ocasiones el hecho o la conducta de quien ha sufrido el daño pueden ser, en todo o en parte, la causa del perjuicio que ésta haya sufrido. En el primer supuesto –conducta del perjudicado como causa exclusiva del daño, su proceder desvirtuará, correlativamente, el nexo causal entre el comportamiento del presunto ofensor y el daño inferido, dando lugar a que se exonere por completo al demandado del deber de reparación. (...)

No obstante, con posterioridad, el rigor del mencionado criterio se atenuó y se estableció en la gran mayoría de ordenamientos el principio según el cual si el comportamiento de la víctima es causa exclusiva del daño debe exonerarse de responsabilidad al demandado (...)

No puede pasarse por alto que en el informe policial de accidente de tránsito, aportado por los demandantes, no se relaciona como hipótesis del accidente que JORGE ALBERTO VELEZ ZAPATA, conductor del vehículo de placas SSF-597, hubiese violado alguna norma de tránsito, como erradamente lo señala la parte actora en el hecho No. 2, sino que, por el contrario, se establece que fue el mismo RUBEN DARIO CASTAÑO quien gesta u origina la causa que devine en su propia muerte cuando pierde el control de su motocicleta, de placas DYV-66C, invadiendo el carril contrario e impactando finalmente sobre el rodante de placas SSF-597.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el señor RUBEN DARIO CASTAÑO, se encontraba conduciendo en tercer grado de embriaguez, el cual es el máximo grado de

⁹ CSJ. Sentencia 16 de diciembre 2010. Rad. 1989-00042-01

acuerdo con la Resolución No. 000414 del 27 de agosto de 2002 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la prueba toxicología elaborada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Suroccidente, seccional Valle del Cauca.

Solicito al Señor Juez, declarar probada esta excepción.

3. CONCURRENCIA DE CULPAS

Señor juez, en el hipotético y remoto que el despacho no acoja la culpa exclusiva de la víctima de eximente de responsabilidad por parte del conductor del vehículo de placas SSF-597, JORGE ALBERTO VELEZ ZAPATA, y, de manera indirecta, por parte de los accionados dentro del proceso de la referencia, solicito se reconozca la presente excepción denominada concurrencia de culpas, sin que implique aceptación de responsabilidad alguna.

Si se llegara a demostrar que, aunque el señor RUBEN DARIO CASTAÑO OBANDO fue determinante en la producción de su propia muerte al conducir embriagado la motocicleta de placas DYV-66C, también intervino en la realización de dicho resultado el señor JORGE ALBERTO VELEZ ZAPATA, cuando conducía el rodante de placas SSF-597, se deberá aplicar la concurrencia de culpas, reiterando que esto no implica aceptación de responsabilidad alguna.

En nuestro ordenamiento, la concurrencia de culpas se encuentra consagrada en el artículo 2357 del código civil:

ARTICULO 2357. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN. La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente.

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado en el siguiente sentido:

“con ocasión de una eventual concausalidad en la ocurrencia del daño podría llegar a disminuirse la indemnización, o incluso exonerar a la entidad de toda responsabilidad; escrutinio que habrá de realizarse no a partir de la mera confrontación de conductas sino evaluando la causa jurídica del daño para definir en qué medida una u otra fue la determinante en la ocurrencia del hecho dañoso”¹⁰

En síntesis, debe evaluarse jurídicamente el daño, cual sería la presunta muerte de RUBEN DARIO CASTAÑO, y se debe establecer el grado de participación de aquél y del señor JORGE ALBERTO VELEZ ZAPATA en la materialización de la muerte del primero para que el despacho pueda determinar la culpa exclusiva de la víctima, como eximente de responsabilidad, o la concurrencia de culpas como reductor de la indemnización.

¹⁰ Corte Suprema de Justicia, Sentencia 1697 del 14 de mayo de 2019, Rad. No. 2009-00447-01

Conforme a las pruebas obrantes, como lo señalé anteriormente, es claro que lo procedente sería excluir de responsabilidad totalmente a JORGE ALBERTO VELEZ ZAPATA por cuanto no está acreditado que hubiese participado en la producción de la muerte de RUBEN DARIO CASTAÑO.

Resulta claro que RUBEN DARIO CASTAÑO pierde el control de la motocicleta de placas DYV-66C e impacta el rodante de placas SSF-597. Dicha situación fue totalmente imprevisible e irresistible para JORGE ALBERTO por cuanto no podía vaticinar que el hijo de los accionantes perdería el control de su vehículo y le era totalmente imposible evitar la colisión pues se transportaba por su propia vía respetando las señales reglamentarias y fue RUBEN DARIO quien invadió el carril contrario, dirigiéndose contra el rodante de aquel.

Por lo anterior, lo procedente sería que prospere la exclusión de responsabilidad por la culpa exclusiva de la víctima. No obstante, si el despacho considera que JORGE ALBERTO VELEZ tuvo injerencia en el fatal accidente al no preverlo o evitarlo, si es que se demuestra que lo podía hacer, o que se acredite la violación de alguna norma de tránsito de parte del conductor del vehículo de placas SSF-597 que conllevara a la producción de la muerte de RUBEN DARIO, deberá el despacho reconocer la concurrencia de culpas, debiendo reducirse a la mitad el monto indemnizatorio que se le reconocería a la parte actora.

Solicito al Señor Juez, declarar probada esta excepción.

4. CONGRUENCIA DE LAS PRETENSIONES CON LA SENTENCIA.

Señor juez, se interpone esta excepción por cuanto el demandante no solicita el reconocimiento de lucro cesante pasado o consolidado, así como tampoco pide el pago de las costas ni daño emergente ni ningún otro perjuicio extrapatrimonial diferente al moral, por lo cual se debe dar aplicación al artículo 281 del CGP, que reza:

Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.

Es decir, no podrá reconocerse en la sentencia concepto alguno distinto o superior a los solicitados por la parte actora, aunque se aclara que ninguno de ellos tiene vocación de prosperidad.

Por lo anterior, solicito declarar probada esta excepción.

5. EXCESIVA TASACIÓN DE LOS PERJUICIOS INMATERIALES PRETENDIDOS POR LA PARTE ACTORA

Señor juez, se formula esta pretensión por cuanto la parte actora pretende el reconocimiento de 450 salarios mínimos legales mensuales vigentes en común y proindiviso, por concepto de perjuicios morales, a favor de LUIS ARTURO CASTAÑO ARANGO y ANADELIA OBANDO BERMUDEZ, cuando resulta totalmente excesiva dicha pretensión, además de que es improcedente.

Se propone esta excepción, sin que con ello se esté reconociendo responsabilidad a cargo de mi representada, solo se eleva con el propósito de manifestar que, bajo el hipotético caso en que el Juzgado emitiera un fallo condenatorio al extremo pasivo, las sumas reclamadas deben necesariamente reajustarse para reconocer (si a ello hubiere lugar) lo que efectivamente correspondiera al extremo actor.

En ese sentido, debe recordarse que el reconocimiento por perjuicios inmateriales no opera de manera automática, ante la ocurrencia de un hecho dañoso, ni se presume en todos los casos; de allí que corresponda al juez, dentro de un análisis minucioso, objetivo y detallado de la situación, concluir si se acreditó o no la existencia de tal perjuicio, y acto seguido, de encontrarlo probado, le corresponderá determinar su cuantía, atendiendo lógicamente a criterios razonables y proporcionales que no generen un enriquecimiento injustificado a favor de los demandantes, en un franco desmedro de la contraparte.

El reconocimiento por concepto de perjuicios morales tiene como finalidad *“otorgar a la víctima una satisfacción íntima que borre y compense la angustia y el dolor sufrido”*. La suma por este perjuicio es determinada única y exclusivamente por el Juez en la sentencia, con base en lo establecido jurisprudencialmente y según las pruebas aportadas al proceso, en cuanto al daño moral, la parte demandante deberá acreditar los elementos constitutivos de la responsabilidad civil y como consecuencia existirá eventualmente el pago o indemnización por los daños que se prueben.

Los demandantes solicitan por perjuicios morales la suma de 450 salarios mínimos legales mensuales vigentes en común y proindiviso, pretensión que resulta abismal comparándolo con lo reconocido por la Corte Suprema de Justicia, denotando un afán de lucro injustificado, imposible de satisfacer.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia SC665 del 2019, reconoció un valor máximo de \$60.000.000 a favor de los familiares de la víctima directa por concepto de perjuicios morales en caso de muerte. En tal sentido es excesiva la valoración por daño extrapatrimonial que realiza el demandante.

Solicito al Señor Juez, declarar probada esta excepción.

6. INEXISTENCIA DEL LUCRO CESANTE PRETENDIDO POR LOS DEMANDANTES

Se propone la presente excepción, respecto a los padres de la víctima, en primer lugar, teniendo en cuenta la reiterada jurisprudencia de las altas cortes, en la que se ha manifestado que se presume que los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco años, en consideración *“al hecho social de que a esa edad es normal que los colombianos hayan formado su propio hogar, realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas en otros frentes familiares”*¹¹.

Atendiendo a lo enunciado, y descendiendo al caso concreto tenemos que:

- Al momento del fallecimiento del accidente que dio origen a presente litigio, el señor Rubén Darío Castaño, tenía 36 años de edad
- No existe prueba de actividad económica alguna desarrollada por el señor Rubén Darío Castaño a la fecha de ocurrencia del hecho.
- No se acredita la ayuda o apoyo económico que los demandantes recibían de la víctima fatal del accidente, así como tampoco se acredita la existencia de alguna circunstancia a partir de la cual se pueda inferir que tal obligación pudiera extenderse más allá de la edad de 25 años.

Ahora bien, no es posible presumir, como lo ha señalado en repetidas oportunidades las Altas Cortes, que existe perjuicio por privación de ingresos provenientes de un hijo, cuando no existe prueba alguna cierta y fidedigna de que efectivamente ese descendiente provee en forma periódica, constante e ininterrumpida una ayuda económica, pues no puede calificarse como una privación de ingresos, el mero hecho de que eventualmente sin periodicidad, sin permanencia, sin constancia, un hijo le dé algún obsequio o alguna cantidad o bien apreciable económicamente a sus progenitores, como lo que serían regalos de cumpleaños, navidad, etc., pues en cualquiera de estos casos se considera que no puede haber ni predicarse la existencia del lucro cesante.

Adicionalmente, debe advertirse que el demandante ya contaba con 36 años de edad, y que tenía su propio hogar, cuestión que hace inviable que se presuma alguna ayuda económica en favor de sus padres, al respecto, el Honorable Consejo de Estado ha establecido:

“En los términos solicitados en la demanda, y como quiera que se trata de la muerte de un soldado conscripto, la Sala decretará a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las sumas que Marín Gil ha debido percibir durante el período comprendido entre la fecha en que terminaría la

¹¹ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 26 de noviembre de 2014. Radicado: 19001-23-31-000-2000-03226-01(26855) (CP Hernán Andrade Rincón). Esta posición ha sido asumida por el Consejo de Estado, entre otras, en las sentencias del 22 de octubre de 2012. Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado. Radicado: 52001-23-31-000-1997-08790-01(24776) (CP Olga Mérida Valle de la Hoz) y sentencia del 22 de abril de 2015. Sección Tercera del Consejo de Estado. Radicado: 5-001-23-31-000-2000-03838-01 (19.146) (CP Stella Conto Díaz del Castillo).

prestación del servicio militar obligatorio y el momento en que cumpliría 25 años de edad, como quiera que se entiende, conforme a las reglas de la experiencia, que un hijo ayuda a sus padres hasta que cumple la mencionada edad, oportunidad en la cual se presume inicia una vida independiente¹²

Del mismo modo, dicha corte en sentencia posterior, vario su postura respecto de la presunción anterior e indicó:

“Lo anterior significa que desde el punto normativo tampoco existen razones para presumir que los hijos entre los 18 y los 25 años contribuyen con el sostenimiento económico de sus padres, cuando la exigibilidad de esta obligación no surge por la simple relación de parentesco, sino que demanda la configuración de dos situaciones de hecho: por un lado que el peticionario carezca de bienes y, por tanto, requiera los alimentos que solicita y, por el otro, que la persona a quien se le piden los alimentos tenga los medios económicos para procurarlos.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala unificará su jurisprudencia para señalar que, en ausencia de prueba que demuestre **(i) que los hijos contribuyen económicamente con el sostenimiento del hogar paterno o materno, porque materialmente están en condiciones de hacerlo, es decir, porque ejercen una actividad productiva que les reporta algún ingreso, y (ii) que los padres son beneficiarios de la obligación alimentaria porque no tienen los medios para procurarse su propia subsistencia, bien porque están desempleados, enfermos o sufren de alguna discapacidad, no puede presumirse que la muerte de una persona menor de 25 años genera una pérdida de ingresos cierta a favor de sus padre**¹³ (negrita propia)

Por lo anterior, solicito al Señor Juez, declarar probada esta excepción.

7. IMPROCEDENCIA DE INCLUIR EN EL JURAMENTO ESTIMATORIO TASACIONES DE CARÁCTER EXTRAPATRIMONIAL.

Se propone esta excepción señor Juez, pues el demandante incluye en el juramento estimatorio tasaciones de carácter extrapatrimonial, con lo que se contraviene lo contemplado en el artículo 206 del código general del proceso, en el que se excluye expresamente la cuantificación de los daños extrapatrimoniales en este medio probatorio:

“Artículo 206. Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo

¹²Nota original de la sentencia en cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de octubre 15 de 2008, rad 18586 C.P. Enrique Gil Botero.

¹³ Conforme al criterio empleado por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en varias providencias: sentencias de 8 de junio de 2017, exp. 50352; de 11 de junio de 2015, exp. 33355; de 13 de noviembre de 2014, exp. 30753; y de 5 de abril de 2013, exp. 27281, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación.

(...) **El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales.** Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz.”

Por lo anterior, solicito al Señor Juez, declarar probada esta excepción.

8. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.

Esta excepción se fundamenta en un hecho que es común denominador de la demanda, es decir, la recurrente alusión a una indemnización inexistente, de manera que, pese a la imposibilidad de prosperidad de las pretensiones indemnizatorias contenidas en la demanda, debe destacarse que no es sería viable acceder a peticiones como las demandadas, en cuanto constituyen la búsqueda de indemnización de un detrimento no padecido.

En gracia de discusión si se llegara a proferir una remota condena en contra de mi procurada, generaría un rubro que no tiene justificación legal, lo que se traduciría en un enriquecimiento sin causa, figura prohibida en nuestra legislación.

Por lo anterior, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

9. INNOMINADA.

Consistente en que todo hecho o circunstancia que resultare probado durante el proceso y constituya excepción o defensa para mi mandante frente de las pretensiones deberá así ser declarado.

Lo anterior, conforme a lo estipulado en el art 282 del Código General del Proceso que establece: *“En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda”.*

V. CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR JORGE ALBERTO VELEZ ZAPATA Y TRANSPORTES GINEBRA S.A.

FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA:

FRENTE AL HECHO PRIMERO: Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho de tránsito narrado por la parte actora son ajenas a mi representada, pues la misma no supervisa o tiene relación directa con la actividad de sus vehículos asegurados, de

manera que es física y jurídicamente imposible predicar respecto a ella conocimiento alguno de los hechos relatados en el escrito de demanda, los cuales deben ser fehacientemente probados por el extremo activo de la litis para viabilizar sus reclamos indemnizatorios.

FRENTE AL HECHO SEGUNDO: Es cierto que mi prohijada expidió la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No 1000306, la cual fue tomada por TRANSPORTES GINEBRA S.A. y en la que figura como asegurado el señor JORGE ALBERTO VELEZ ZAPATA, no obstante, ello no implica per se que la misma se pueda afectar. Al respecto, es importante reseñar que para todos los efectos legales y jurídicos, deberá tenerse en cuenta que la obligación condicional contemplada en las pólizas de seguro se circunscribe a la cobertura expresamente estipulada en sus condiciones, las que determinan el ámbito, extensión o alcance del respectivo amparo, así como sus límites, sumas aseguradas, deducibles, las exclusiones de amparo, la vigencia, etc., **luego son esas condiciones las que enmarcan la obligación condicional que contrae el asegurador y por eso el Juzgador debe sujetar el pronunciamiento respecto de la relación sustancial, al contenido de las condiciones de la póliza.**

Es pertinente insistir en que la obligación de la aseguradora **sólo nace si efectivamente se realiza el riesgo amparado en las pólizas y no se configura ninguna de las causales de exclusión o de inoperancia del contrato de seguro, convencional o legal.** Esto significa que la responsabilidad se predicará cuando el suceso esté concebido en el ámbito de la cobertura del respectivo contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior y ante la imposibilidad de declarar en cabeza del señor JORGE ALBERTO VELEZ ZAPATA algún tipo de responsabilidad civil extracontractual, Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No 1000306 no podrá verse afectada, pues no se ha realizado el riesgo asegurado, dicho en otras palabras, a la luz del contrato de seguro, **no se ha materializado el siniestro.**

FRENTE AL HECHO TERCERO: No se comporta como un hecho, no obstante, se debe resaltar que en el presente caso se encuentra acreditada el hecho de la víctima como causal exoneratoria de responsabilidad, motivo por el cual la misma no podrá declararse.

FRENTE AL HECHO CUARTO: Es cierto que mi prohijada suscribió la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No 1000306 y en ella se consignó como asegurado al señor JORGE ALBERTO VELEZ ZAPATA, no obstante, debe decirse que tal póliza no se podrá afectar, por cuanto no se ha materializado el riesgo asegurado, esto es, no se ha declarado una responsabilidad civil en cabeza suya, la cual en todo caso es improcedente por encontrarse acreditada la culpa determinante y exclusiva de la víctima.

FRENTE AL HECHO QUINTO: Pese a que a mi representada no le consten las circunstancias de tiempo, modo o lugar en que ocurrieron los hechos relatados en la presente demanda, este numeral se acepta teniendo en cuenta el IPAT y demás pruebas documentales obrantes en el plenario.

FRENTE AL HECHO SEXTO: Es cierto, la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No 1000306 tiene un periodo de vigencia desde el día 14 de diciembre de 2018, hasta el 14 de diciembre de 2019, motivo por el cual se encontraba vigente para el día 3 de febrero de 2019, no obstante, reitero que este solo motivo no es suficiente para generar afectación alguna de dicha póliza, pues para el caso en concreto se requiere la declaratoria de responsabilidad civil, la cual no podrá realizarse, al encontrarse acreditado el hecho de la víctima como causal eficiente y adecuada del referido accidente de tránsito.

FRENTE A LA PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

FRENTE A LA PRETENSIÓN PRIMERA: Respecto de esta pretensión debe decirse que el llamamiento en garantía ya fue admitido, no obstante, ello no implica que mi representada deba responder de manera alguna, pues en el presente caso se encuentra plenamente acreditada la culpa de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad.

FRENTE A LA PRETENSIÓN SEGUNDA: Me opongo, pues inicialmente debe decirse que es inviable la declaratoria de responsabilidad civil en el presente caso, la cual es la que podría generar una condena, no obstante, también deberá tenerse en cuenta que la responsabilidad de mi compañía se circunscribe a lo pactado en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No 1000306, la cual indica el alcance de su cobertura, sumas aseguradas y deducibles, los cuales en caso de una eventual condena deberán ser asumidos por los llamantes en garantía.

FRENTE A LA PRETENSIÓN TERCERA: No se comporta como una pretensión.

VI. EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

1. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A, POR LA NO REALIZACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO.

Señor juez, se formula esta excepción teniendo en cuenta que en el caso que nos ocupa no se ha materializado el riesgo asegurado a través del cual se deriva la Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. 1000306.

Recordemos que el numeral 2 del artículo 1045 del Código de comercio establece, como elemento esencial del contrato de seguro, el riesgo asegurable. Igualmente, el artículo 1072 ibidem señala que se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado.

Es fundamental que el despacho tome en consideración que, en el ámbito de libertad contractual que les asiste a las partes en el contrato de seguro, la Compañía Aseguradora en virtud de la facultad que se consagra en el artículo 1056 del Código de Comercio, puede asumir a su arbitrio todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés asegurado. Es de esta forma, como se explica que al suscribir el contrato aseguratorio respectivo, la aseguradora decide otorgar determinados amparos supeditados al cumplimiento de ciertas condiciones generales y particulares estipuladas

en el mismo, de tal manera que su obligación condicional solo será exigible si se cumplen con los presupuestos que hayan sido pactados por las partes.

Dicho lo anterior, en la cláusula No. 1 del condicionado general de la póliza No. 1000306, las partes acordaron lo siguiente:

“El presente contrato de seguro tiene por objeto indemnizar o reembolsar al asegurado las sumas por las cuales sea civilmente responsable, mediante sentencia judicial debidamente ejecutoriada o mediante acuerdo o transacción autorizada de modo expreso por SBS COLOMBIA, por hechos en que incurra el asegurado a consecuencia de un accidente o serie de accidentes emanados de un solo evento súbito e imprevisto ocasionado con el vehículo, durante la vigencia de este seguro, que constituya responsabilidad civil extracontractual en cabeza del asegurado, según aparezca claramente determinado en el “cuadro de declaraciones” de la presente póliza, derivada del transporte terrestre automotor de pasajeros, de acuerdo con lo estipulado en las disposiciones legales vigentes en la república de Colombia” (Aparte Subrayado)

Para que se configure la obligación indemnizatoria de parte de mi representada, debe materializarse el riesgo asegurado o cumplirse con las siguientes condiciones:

1. Que el asegurado sea declarado civilmente responsable
2. Que la declaratoria de responsabilidad de asegurado se efectúe a través de sentencia judicial debidamente ejecutoriada o mediante acuerdo o transacción autorizada por mi representada.
3. Que los hechos por los cuales se le declara civilmente responsable sean consecuencia de un accidente o serie de accidentes emanados de un solo evento súbito e imprevisto ocasionado con el vehículo durante la vigencia del seguro.
4. Que la declaratoria de responsabilidad constituya responsabilidad civil extracontractual en cabeza del asegurado derivada del transporte terrestre automotor de pasajeros.

En el caso que nos ocupa no se dan varios de los requisitos antes señalados, lo cual conlleva a la no realización del riesgo asegurado. Estos son:

1. El asegurado no ha sido declarado civilmente responsable a través de sentencia judicial debidamente ejecutoriada o mediante acuerdo o transacción autorizada por mi representada.

Dicho de otra forma, para que exista obligación indemnizatoria a cargo de mi representada debe existir previamente sentencia, debidamente ejecutoriada, a través de la cual se declara civilmente responsable al asegurado, lo cual no ocurre en el presente pues no existe a la fecha tal providencia judicial en contra de SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

Solicito al Señor Juez, declarar probada esta excepción.

2. LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO.

La presente excepción de fondo la edifico con fundamento jurídico conforme a lo estipulado en el art 1079, relativo al contrato de seguros, que rige la legislación comercial y el cual me permito citar a continuación:

“El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”

En atención de las pretensiones de la demanda, es necesario verificar el amparo de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, para lo cual se debe atender el valor asegurado y que será en todo caso el valor máximo al que la aseguradora estará obligado en virtud de la presente demanda, si es que remota e hipotéticamente hubiera lugar a ello.

Es decir que, si bien es cierto, en la eventualidad de una sentencia condenatoria en contra mi prohijada como compañía de seguros, esta sólo responderá hasta el límite de lo contratado en la póliza y por las coberturas otorgadas en el contrato de seguros ya identificadas.

En este punto es importante indicarle al Juez, que la póliza No. AA002744 está sujeta a una suma asegurada así:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	60 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	60 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	120 SMMLV

Por lo tanto, de llegarse a configurar la realización del siniestro, es decir, que se llegare a declarar la existencia de responsabilidad civil extracontractual en cabeza de los demandados en el presente asunto, la condena no podrá superar 60 SMMLV, los cuales corresponden a la suma asegurada que se pactó en el contrato de seguro para el amparo de lesiones o muerte de un tercero, lo anterior, debido a que esa es la única forma de mantener el equilibrio económico que motivó a mi procurada a asumir el riesgo asegurado.

Es decir que, conforme a lo pretendido en la demanda, en la improbable e hipotética condena a mi prohijada por lesiones o muerte de una persona, esta sólo se encuentra obligada hasta 60 SMLMV.

Teniendo en cuenta que el salario mínimo legal vigente para el año 2019, época de los hechos, era de \$828.116, los límites serían los siguiente:

$$\text{SMLMV} \times \text{VA} = \text{TOTAL VALOR ASEGURADO}$$

\$828.116x 60 SMLMV = \$49.686.960 pesos

Solicito al Señor Juez, declarar probada esta excepción.

3. DEDUCIBLES PACTADOS.

Subsidiariamente a los argumentos precedentes, sin perjuicio de los fundamentos expuestos a lo largo del escrito y sin que esta mención constituya aceptación de responsabilidad alguna por parte de mi representada, en el improbable evento en el que el honorable Despacho considere que la Aseguradora sí tiene la obligación de pagar indemnización alguna, resulta fundamental que tenga en cuenta los siguientes deducibles pactados en el contrato de seguro.

El artículo 1103 del código de comercio nos dice que: *“Las cláusulas según las cuales el asegurado deba soportar una cuota en el riesgo o en la pérdida, o afrontar la primera parte del daño, implican, salvo estipulación en contrario, la prohibición para el asegurado de protegerse respecto de tales cuotas, mediante la contratación de un seguro adicional. La infracción de esta norma producirá la terminación del contrato original.”*

Al respecto, dentro de las condiciones particulares de la Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 1000306, se estipuló, frente al deducible que:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	60 SMMLV	20%, MÍNIMO 5 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	60 SMMLV	20%, MÍNIMO 5 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	120 SMMLV	20%, MÍNIMO 5 SMMLV

Igualmente, dentro del condicionado particular de la póliza se acordó lo siguiente frente al deducible:

“El deducible establecido para el amparo de R.C.E y/o R.C.C. en la carátula de la póliza se mantendrá siempre y cuando el accidente de tránsito sea reportado dentro de los 30 días calendarios siguientes a la ocurrencia del mismo el conocimiento por parte del asegurado o tomador del evento que genera dicha responsabilidad. En caso de presentar a SBS Colombia el siniestro fuera de los términos establecidos, el deducible se modificará de acuerdo a los días transcurridos después del día 30 así:

Hasta 60 días calendarios deducible 20% mínimo 6 SMMLV

Hasta 90 días calendarios deducible 30% mínimo 10 SMMLV

Más de 90 días calendarios deducible 50% mínimo 20 SMMLV”

Cabe destacar que la empresa TRANSPORTES GINEBRA S.A realizó aviso de siniestro

a mi representada el 08 de marzo de 2019, es decir por fuera de los 30 días siguientes a la ocurrencia del supuesto accidente, que se dice acaeció el 03 de febrero de 2019, por lo cual los deducibles aplicables por cada amparo son:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	60 SMMLV	20%, MÍNIMO 6 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	60 SMMLV	20%, MÍNIMO 6 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	120 SMMLV	20%, MÍNIMO 6 SMMLV

En este orden de ideas, resulta de suma importancia que el Honorable Juzgador tome en consideración que, tanto la definición del deducible como su forma de aplicación, ha sido ampliamente desarrollada por la Superintendencia Financiera de Colombia en distintos conceptos, como el que se expone a continuación:

*“Una de tales modalidades, **la denominada deducible, se traduce en la suma que el asegurador descuenta indefectiblemente del importe de la indemnización, de tal suerte que en el evento de ocurrencia del siniestro no indemniza el valor total de la pérdida**, sino a partir de un determinado monto o de una proporción de la suma asegurada, con el objeto de dejar una parte del valor del siniestro a cargo del asegurado. El deducible, que puede consistir en una suma fija, en un porcentaje o en una combinación de ambos, se estipula con el propósito de concientizar al asegurado de la vigilancia y buen manejo del bien o riesgo asegurado.*

En este orden de ideas, correspondería a las partes en el contrato de seguro determinar el porcentaje de la pérdida que sería asumido por el asegurado a título de deducible, condición que se enmarcaría dentro de las señaladas por el numeral 11 del artículo 1047 del Código de Comercio al referirse a “Las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes”¹⁴. (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

De esta manera, en el hipotético evento en el que mi representada sea declarada civilmente responsable en virtud de la aplicación del contrato de seguro, es de suma importancia que el Honorable Juzgador descuenta del importe de la indemnización, que se deba pagar, la suma pactada como deducible.

Solicito al Señor Juez, declarar probada esta excepción.

¹⁴ Superintendencia Financiera de Colombia. Concepto 2016118318-001 del 29 de noviembre de 2016. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, DEDUCIBLE.

4. CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE COBERTURA

Sin perjuicio de las demás excepciones propuestas, y sin que con ello se esté comprometiendo a mi representada, propongo esta excepción a fin de manifestar que en el improbable caso en que el despacho considere que sí nace obligación indemnizatoria a cargo de la aseguradora, es menester advertir que en las condiciones pactadas en el contrato de seguro se establecieron unos parámetros que enmarcan la obligación condicional que contrajo SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., y delimitan la extensión del riesgo asumido por ella. En efecto, en ellas se refleja la voluntad de los contratantes al momento de celebrar el contrato, y definen de manera explícita las condiciones del negocio asegurativo.

Ahora bien, tal como lo señala el Artículo 1056 del Código de Comercio, el asegurador puede, a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume:

“(…) Art. 1056.- Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado (…)”.

En virtud de la facultad referenciada en el artículo previamente citado, el asegurador decidió otorgar determinados amparos, supeditados al cumplimiento de ciertos presupuestos, incorporando en la póliza determinadas barreras cualitativas que eximen al asegurador a las prestaciones señaladas en el contrato, las cuales se conocen generalmente como exclusiones de la cobertura.

En consecuencia, le ruego al despacho que, en caso de hallarse configurada una causal de exclusión, se sirva declararla con miras a proteger los derechos e intereses que le atañen a mi prohijada.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

5. DISPONIBILIDAD Y/O REDUCCIÓN DEL VALOR ASEGURADO.

Teniendo en cuenta que en virtud del art 1111 del Código de Comercio el valor asegurado se reducen conforme a los siniestros que se presenten y los pagos que la compañía aseguradora haga, en caso de que durante el trámite del proceso se llegue a pagar otras reclamaciones sea judicial o extrajudicialmente, que afecten de forma directa, la suma asegurada se reducirá en esos pagos válidos, siendo que si para la fecha de la sentencia, se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna.

Solicito al Señor Juez, declarar probada esta excepción.

6. EL CONTRATO ES LEY PARA LAS PARTES

Sin que esta excepción constituya aceptación de responsabilidad alguna, es pertinente mencionar que la obligación de la aseguradora sólo nace si efectivamente se realiza el

riesgo amparado en la póliza y no se configura ninguna de las causales de exclusión o de inoperancia del contrato de seguro, convencionales o legales. Esto significa que la responsabilidad se predicará cuando el suceso esté concebido en el ámbito de la cobertura del respectivo contrato, según su texto literal y por supuesto la obligación indemnizatoria o de reembolso a cargo de mi representada se limita a la suma asegurada, siendo este el tope máximo, además de que son aplicables todos los preceptos que para los seguros de daños y responsabilidad civil contiene el Código de Comercio, que en su Art. 1079 establece que “ *El asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada* ”.

Se hace imprescindible destacar que la obligación del asegurador no nace en cuanto no se cumple la condición pactada de la que pende para su surgimiento, condición esa que es la realización del riesgo asegurado o siniestro, o sea que el evento en cuestión efectivamente esté previsto en el amparo otorgado, siempre y cuando no se configure una exclusión de amparo u otra causa convencional o legal que la exonere de responsabilidad, por ende la eventual obligación indemnizatoria está supeditada al contenido de cada póliza, es decir a sus diversas condiciones, al ámbito del amparo, a la definición contractual de su alcance o extensión, a los límites asegurados para cada riesgo tomado, etc. Al respecto siempre se deberán atender los riesgos asumidos por la convocada, los valores asegurados para cada uno de los amparos, etc.

La póliza utilizada como fundamento contractual de la convocatoria, como cualquier contrato de seguro, se circunscribe a la cobertura expresamente estipulada en sus condiciones, las que determinan el ámbito, extensión o alcance del respectivo amparo, así como sus límites, sumas aseguradas, deducibles (que es la porción que de cualquier siniestro debe asumir la entidad asegurada), las exclusiones de amparo, la vigencia, etc., luego son esas condiciones las que enmarcan la obligación condicional que contrae el asegurador y por eso el Juzgador debe sujetar el pronunciamiento respecto de la relación sustancial, que sirve de base para el llamamiento en garantía, al contenido de las condiciones de la póliza.

Consecuentemente la posibilidad de que surja responsabilidad de la aseguradora depende estrictamente de las diversas estipulaciones contractuales, ya que su cobertura exclusivamente se refiere a los riesgos asumidos, según esas condiciones y no a cualquier evento, ni a cualquier riesgo no previsto convencionalmente, o excluido de amparo.

Solicito al Señor Juez, declarar probada esta excepción.

7. SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES DEL CONTRATO DE SEGURO, EN LA QUE SE IDENTIFICA LA PÓLIZA, EL CLAUSULADO Y LOS AMPAROS.

Es preciso señalar que de acuerdo con lo contemplado en el artículo 1044 del C.CO, SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., podrá proponer a los beneficiarios, la excepciones que pueda alegar en contra del tomador y el asegurado cuando son personas distintas, por tanto, en caso de un fallo en contra este deberá ajustarse de acuerdo con las condiciones pactadas dentro del contrato de seguro, y dicha condena no podrá exceder

los parámetros acordados por los contratantes.

Por lo tanto, en caso de que prosperen las pretensiones de responsabilidad civil de los demandantes contra mi representada, SBS SEGUROS COLOMBIA S.A, en ejercicio de la acción de reclamación directa de la víctima contra la aseguradora, tal relación deberá estar de acuerdo con el contrato de seguro denominado PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 1000306, en la cual se encuentran contenidas las condiciones particulares de la póliza y por las condiciones generales.

8. AUSENCIA DE SOLIDARIDAD DEL CONTRATO DE SEGURO CELEBRADO CON SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

El artículo 1568 del código civil colombiano establece “*DEFINICIÓN DE OBLIGACIONES SOLIDARIAS. En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito.*

Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum.

La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley.” Resaltado fuera del texto

Teniendo en cuenta lo anterior al analizar el caso concreto, resulta claro que ni en una convención, ni en un testamento, ni en la ley, se estableció la solidaridad civil respecto de la empresa Tomadora de la póliza y SBS SEGUROS COLOMBIA S.A figura que tampoco se pactó en dentro contrato de seguro celebrado por éstas. Por lo tanto, a mi representada no le es aplicable ningún tipo de solidaridad. Por lo anterior en caso de una eventual sentencia en contra de los intereses de SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. solicito al despacho tener en cuenta lo establecido en el artículo 1079 del código de comercio que establece “*El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074*”. Y de esta manera el valor a pagar no podrá ser superior al valor de la suma asegurada.

VII. FRENTE A LAS PRUEBAS APORTADAS Y SOLICITADAS EN LA DEMANDA

SOLICITUD PARA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Señor juez, el artículo 262 del C.G.P reza lo siguiente:

Artículo 262. Documentos declarativos emanados de terceros. Los documentos

privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación.

En virtud de lo anterior, me permito solicitar que se ratifique el contenido de los siguientes documentos, aportados por el demandante:

- I. Informe policial de accidente
- II. Certificado de Tradición del vehículo SSF-597
- III. Informe No. DSCAUC-DRSPCCDTE-LLFO-201901017611100002 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Suroccidente Seccional Cauca-Popayán
- IV. Registro Civil de Defunción No. 06010839
- V. Registro Civil de Nacimiento No. 11368827
- VI. Oficio No. 20590-01-01-F51 Secc-009 de 04 de febrero de 2019, de la Fiscalía General de la Nación
- VII. Informe Pericial de Necropsia No. 2019010176111000028 del Instituto Nacional de Medicina Legal, Regional Suroccidente, Seccional Valle del Cauca

Para efectos de lo anterior, le solicito al despacho que requiera a la parte actora para que dentro de los 30 días siguientes aporte la ratificación de los anteriores documentos, so pena de desistimiento tácito.

INTERVENCION EN DOCUMENTALES Y TESTIMONIALES

Con el objeto de probar los hechos materia de las excepciones de mérito, nos reservamos el derecho de contradecir las pruebas documentales al proceso y participar en la práctica de las testimoniales que lleguen a ser decretadas, así como del correspondiente interrogatorio de parte e intervenir en las diligencias de ratificación y otras pruebas solicitadas.

Me reservo el derecho de interrogar a los testigos solicitados por la parte demandante.

VIII. MEDIOS PROBATARIOS

Solicito atentamente decretar y tener como pruebas las siguientes:

DOCUMENTALES

Respetuosamente solicito se tengan como tales las siguientes:

- Copia del Certificado de existencia y representación legal de **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**, la cual ya obra en el plenario.
- Escritura pública No. 1910 de 04 de julio de 2001, la cual ya obra en el plenario.
- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual para vehículos No. 1000306, la cual ya obra en el plenario.
- Condicionado General de la póliza No. 1000306, denominado CLAUSULADO 20122017-1322-P-06-RCC_TRANSPASAJER-D00I, el cual ya obra en el plenario.
- Aviso de siniestro realizado por TRANSPORTE GINEBRA S.A. el 08 de marzo de 2019,

el cual ya obra en el plenario.

- Consulta realizada en la Fiscalía General de la Nación del SPOA No. 763066000175201900002, la cual ya obra en el plenario.
- Copia del Informe Pericial de Toxicología Forense realizado al señor RUBEN DARIO CASTAÑO OBANDO (q.e.p.d.) , el cual ya obra en el plenario.
- Copia del expediente del proceso penal adelantado por la FISCALIA 51, UNIDAD SECCIONAL – GUACARÍ, SECCIONAL VALLE DEL CAUCA dentro del SPOA No. 76306600017520190000, el cual ya obra en el plenario.
- Informe Toxicológico realizado al señor Rubén Darío Castaño Obando (Q.E.P.D.)

INTERROGATORIO DE PARTE

Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a LUIS ARTURO CASTAÑO ARANGO y a la señora ANADELIA OBANDO BERMUDEZ para que en audiencia pública absuelvan el interrogatorio que verbalmente, o mediante cuestionario escrito, le formularé sobre los hechos de la demanda y el traslado de la contestación.

TESTIMONIAL

Respetuosamente solicito decretar la práctica del testimonio de la Dra. Jinneth Hernández Galindo, identificada con cédula de ciudadanía 38.550.445, quien tiene domicilio en la ciudad de Cali y puede ser citada en la Calle 4 No. 75-71 apto 504 de la ciudad de Cali, cuyo objeto de la prueba testimonial será declarar sobre las condiciones de la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. 1000306, la no realización del riesgo asegurado, el alcance de su cobertura, amparos y condiciones, deducibles, etc.

IX. NOTIFICACIONES

La parte actora, en la dirección consignada en el escrito de la demanda.

Mi representada SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. en la Cr 9 A No 99 – 07, Piso 12, 13, 14, 15 de Bogotá, y en el correo electrónico: notificaciones.sbseguros@sbseguros.co

El suscrito recibirá notificaciones en la Secretaría de su despacho o en la Avenida 6A Bis No. 35N-100, Centro Empresarial Chipichape, Oficina 212 de la ciudad de Cali.
Email: notificaciones@gha.com.co.

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA
C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.
T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

Vista previa no disponible